



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, seis de diciembre de dos mil veintidós

A22-122

ASUNTO: QUEJA y APELACIÓN AUTO - FUERO SINDICAL - permiso para despedir
DEMANDANTE: INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
DEMANDADO: JAIME ARISTIZABAL TOBÓN
SINDICATO: SINTRAE
RADICADO: 05001-31-05-010-2021-00176-04
DECISIÓN: CONFIRMA

Link: [T22-122 FUERO queja y apelación auto decreto pruebas](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver dos asuntos. De un lado, la queja formulada por el trabajador demandado contra el auto que negó la alzada, y de otro lado, el recurso de apelación interpuesto por el sindicato contra la decisión proferida el 11 de noviembre de 2022 mediante la cual el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín negó el decreto de una prueba.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante ACTA 35 de discusión, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

- Pretende INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. que tras ordenarse el levantamiento del fuero sindical, se otorgue permiso para despedir al señor JAIME ARISTIZABAL TOBÓN por incurrir en sendas faltas graves que dan lugar a la terminación del contrato con justa causa. Relata los hechos relacionados con la existencia del contrato de trabajo, el fuero del que goza su subalterno, así como aquellos que configuran la causa invocada, relacionados, en síntesis, con no asistir a capacitaciones ni presentarse a laborar tras notificarle su reincorporación al cargo ante la cesación del permiso sindical. Añade que tras ello, el día 16 de marzo de 2021 le comunicó la decisión de dar por

terminado el contrato, condicionada a que el Juez del Trabajo autorizara el levantamiento del aludido fuero respecto del sindicato SINTRAE.

- Tanto la organización sindical como el trabajador contestaron esta acción. Niegan la existencia de la sustitución patronal, así como el carácter de empleador de la sociedad demandante arguyendo que el correspondiente contrato fue suscrito con la empresa INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA para ejercer el cargo de TECNICO ELECTRICISTA. También precisa él que se encuentra afiliado tanto a la organización sindical denominada SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA "SINTRAE" como primer suplente, como al SINDICATO "SINTRISA", donde es presidente de la junta directiva nacional, por lo que su fuero sindical deriva de ambas organizaciones. Que goza de permiso sindical permanente por parte de su verdadera empleadora que es ISA, cuya fuente es la Convención Colectiva de Trabajo suscrita desde 1977, vigencia que se ha venido prorrogando de seis en seis meses a partir del 1 de abril de 2011 de acuerdo con la ley, y de la redacción de su clausulado se extractaba que NO era necesario "solicitarlos" nuevamente a la empresa, simplemente se informaban con la debida antelación, derecho adquirido que viene utilizando permanentemente. Niega la existencia de las notificaciones y/o comunicaciones que enlista la sociedad demandante en el líbello genitor (bien para convocar al trabajador a una reunión, diligencia, descargos, capacitación, reincorporación), añadiendo que en todo caso las mismas no podrían ser eficaces ya que desconocían sus derechos, pues estaba haciendo uso del permiso sindical remunerado. Que sólo el 23 de marzo de 2021 y por casualidad, conoció la mencionada carta de despido fechada el día 16 del mismo mes y año. También destaca que los sindicatos SINTRISA y SINTRAE presentaron una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuya finalidad es que se declare la nulidad de los actos administrativos proferidos por el Ministerio del trabajo que negaron la solicitud de unidad de empresa, y como consecuencia que se declare su existencia entre INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. ISA – la empresa INTERCOLOMBIA S.A. ESP y la empresa XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. ESP., proceso que cursa en el Juzgado 6º Administrativo de Medellín.
- Al contestar la demanda, entre otros medios, SINTRAE solicitó a título de prueba pericial, que se decretara la siguiente:

"(...) se designe profesional idóneo con conocimientos en ingeniería de sistemas o áreas afines, para que indique si los correos que se adjuntan con el escrito de la demanda fueron efectivamente recibidos, abiertos y conocidos por el destinatario. Lo anterior se sustenta en que resulta medular para la controversia que se defina si efectivamente las citaciones y demás requerimientos que supuestamente hizo la demandante al trabajador demandado fueron conocidos por él para lo que se hace necesario que se defina la autenticidad de la trazabilidad y el significado de lo que certifica SERVIENTREGA.

RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE SERVIENTREGA, QUÉ ES EL ACUSE DE RECIBO? QUÉ ES LECTURA DE MENSAJE? QUÉ LLEGÓ A LA BANDEJA? QUÉ FUE

EFFECTIVAMENTE ABIERTO? CÓMO SABER SI SE ABRIÓ O NO EL DOCUMENTO ADJUNTO? Esas y otras inquietudes deben ser resueltas para definir el asunto. Subsidiariamente, deberá oficiarse a SERVIENTREGA para que explique al Despacho lo anterior (...)."

- En la audiencia celebrada el 11 de noviembre 2022 el a quo negó la práctica de la prueba pericial, decisión contra la que tanto el trabajador como el sindicato interpusieron y sustentaron recurso de apelación. Empero, sólo fue concedido dicho recurso a favor del sindicato, razón por la cual el trabajador presentó la queja.

2. ARGUMENTOS.

2.1. DEL DESPACHO AL RESOLVER

No accedió a dicho medio de prueba al aducir que en el expediente reposaban diversas certificaciones de la empresa de mensajería, visibles en las páginas 91, 97, 101, 105, 120, 130 y 137 en el archivo digital de la demanda, las cuales podía valorar para efectos de esclarecer los elementos cuestionados por el sindicato, por lo que, como despacho, NO requería de ningún conocimiento especial. De ahí que fuera innecesaria su práctica.

En cuanto a la negativa del recurso de alzada, señaló que el apoderado de la parte demandada, es decir, el trabajador, NO tenía legitimación en la causa ni interés para recurrir la providencia que negó su decreto, por la simple razón que NO fue una prueba solicitada por él.

2.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN

2.2.1. PRESENTADO POR EL DEMANDADO JAIME ARISTIZABAL TOBÓN

Considera que debía practicarse la prueba pericial dado que, sin duda, para el análisis de este tipo de documentos, se exigía un conocimiento técnico que el despacho no tenía de cara a la formación como abogados, lo que imposibilitaba un entendimiento real de muchos de los conceptos, de ahí que, desde el punto de vista probatorio, se venían presentando diversos problemas por la interpretación de tales conceptos. Razón por la que era relevante su decretó especialmente de cara a las supuestas omisiones en que había incurrido el subalterno.

QUEJA: indicó que la ley en ningún momento señalaba que, para efectos de interponer este tipo de recursos, sólo lo podía hacerlo exclusivamente quien solicitó la prueba. Que la parte de legitimación para interponer un recurso estaba determinada más por la naturaleza de la providencia que se estaba cuestionando, aspecto en el que debía esclarecerse si de alguna manera tal decisión afectaba los

intereses de quien interponía dicho recurso. Que era evidente que en este proceso todas las pruebas solicitadas y NO decretadas, de alguna manera tenían una incidencia en el resultado del mismo, y sin duda afectaban al trabajador, tornándose indiscutible su legitimación.

2.2.2. APELACIÓN SINTRAJ

Comenzó por advertir que era necesario esclarecer la veracidad de la prueba que el demandante consideró determinante para delimitar la justa causa. Que la empresa decidió utilizar como medio de notificación, un correo electrónico corporativo que ella misma creó para el trabajador, aun cuando aquel NO había laborado para sus servicios ni por un solo día. Que realmente las condiciones que determinaban si un archivo fue abierto, o si simplemente se acusó recibido, herramientas de la notificación electrónica, NO eran claramente evidenciados en las pruebas aportadas por la sociedad demandante, aspecto que debía quedar claro a la luz de un perito experto, llamado a determinar si realmente estas pruebas eran veraces y si cumplían con los parámetros del art. 29 de la Constitución, es decir, la NO afectación del debido proceso del demandado.

3. CONSIDERACIONES:

Sea lo primero advertir que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 4º del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que *niegue el decreto o la práctica de una prueba*.

QUEJA

Ninguna discusión gravita en torno a que el auto que niegue el decreto de una prueba es apelable. La discusión aquí planteada trasciende a este punto y estriba en determinar si el trabajador demandado estaba legitimado para oponerse a lo decidido por el a quo, pese a NO haber sido quien pidió la práctica de la prueba pericial.

Para el juez, la determinación de la legitimación se determina a partir de un factor objetivo, por denominarlo de alguna manera, en tanto se circunscribe a examinar si el disenso proviene de la parte que solicitó la práctica del medio. A su turno, para el recurrente, el interés para recurrir debe analizarse a partir de otro enfoque, en tanto podrá formular reparo quien lo afecte la discusión.

No obstante, la Sala avala el discernimiento del a quo, pero NO desde la tradicional óptica del interés general para obrar como demandante y resistente en una determinada causa, o el requisito sustancial de la legitimación en la causa (necesario para poderse emitir una sentencia de fondo), dado que se puede ser parte, pero carecer de interés para recurrir determinada providencia. Y bajo esa óptica se entiende que quien hace una solicitud o ejecuta un acto, es quien puede oponerse a la resolución que sobre este punto establezca el juez, al margen del gravamen o perjuicio que pueda acarrear para el otro.

En algunos eventos la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el concepto de legitimación en la causa y las diferencias con el interés para obrar. Entre ellos encontramos la providencia AP2939-2021, radicación N° 59560, emitida por la Sala de Casación Penal, cuando señaló que:

Cuando la decisión judicial no se pronuncia respecto de un específico tópico, como consecuencia de que el sujeto procesal no hizo petición alguna al respecto, tampoco existe legitimidad para exigir corrección alguna.

Ello surge evidente, en tanto, en esencia, los recursos son instrumentos previstos por el legislador para que las partes reclamen la corrección de los errores cometidos por los jueces al resolver las peticiones de estas o adoptar determinaciones oficiosas, contexto dentro del cual no puede señalarse como equivocada la ausencia de pronunciamiento sobre lo que no se reclamó.

En palabras sencillas, si la parte no pide un acto específico y, por esa obvia razón, el juez nada decide al respecto, resulta contrario a cualquier coherencia que, por intermedio del recurso, se invoque como equivocada esa supuesta omisión, que no lo es, porque solamente se omite lo que, habiendo sido pedido, no se resuelve.

Sobre el tema podríamos adentrarnos en arduas disquisiciones, de cara a lo que la jurisprudencia ha establecido, pero al margen que dichas consideraciones fueran o no avaladas por el lector, realmente tal análisis se tornaría inocuo, pues en uno y otro evento, el recurso instaurado por la organización sindical que propuso el medio de prueba denegado, favorece lo aquí pretendido por el trabajador.

Es decir, la finalidad del recurso de alzada que formula el apoderado del demandado es que el *ad quem* examine la conducencia, pertinencia y/o utilidad del medio exceptivo, finalidad que precisamente se satisface al examinarse los argumentos de disenso de la organización sindical respecto del auto que negó el decreto de la prueba pericial. Cosa distinta sucedería si el sindicato guardase silencio y la negativa, en apariencia, adquiriese firmeza; ahí sí habría de explicarse con suficiencia por qué al trabajador, NO puede extendersele aquella *legitimación* que está en cabeza de la parte que se le negó el medio de prueba, es decir, la que provocó el acto procesal.

Pero aquí el panorama es otro. En tal sentido, la providencia que decida el recurso de alzada formulado por el sindicato, el últimas resolverá la misma cuestión de la que difiere el trabajador.

APELACIÓN AUTO

Precisado lo anterior, debe indicarse que para esta Sala es claro que a través del presente litigio se pretende obtener el levantamiento del fuero sindical del que goza el trabajador y consecuentemente se conceda el permiso para despedirlo con justa causa con fundamento en las omisiones que le endilga el empleador, relacionadas, en síntesis, con el NO reintegro del trabajador a sus funciones e inasistencia a las jornadas de reinducción programadas. A su turno, el trabajador aquí demandado, replica la prosperidad tal súplica, entre otras razones, aduciendo que las notificaciones y/o comunicaciones que enlista la sociedad demandante en el libelo genitor (bien para convocarlo a una reunión, diligencia, descargos, capacitación, reincorporación), NO fueron recibidas o notificadas, insistiendo que NO tenía conocimiento de las mismas, y añade que, en todo caso, aquellas no podrían ser eficaces ya que desconocían sus derechos, pues estaba haciendo uso del permiso sindical remunerado.

Igual postura replica SINTRAE al señalar en la contestación que el demandado no fue informado sobre el llamado por parte de su empleador ni a capacitaciones ni a prestación del servicio, y también recalca que el señor Aristizábal tenía permiso sindical permanente otorgado por su empleador por ser directivo de la organización sindical.

Desde este enfoque debe analizarse el cumplimiento de los requisitos intrínsecos del medio probatorio cuya negativa comportó objeto de reproche, requisitos que en palabras del tratadista Nattan Nisimblat, garantizan su posterior eficacia; ellos son la conducencia, la pertinencia y la utilidad, definidos por el autor en mención, en su obra derecho probatorio técnicas del juicio oral, 4ª edición, páginas 216 y 2017, así:

- La conducencia como la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar.
- La pertinencia como la relación directa entre la prueba solicitada y el hecho alegado en el proceso, que por demás debe tener asignada una consecuencia en una norma procesal, es decir, la prueba tiende a demostrar aquello que está en debate o es objeto de prueba. Será impertinente si el hecho no se alegó o siendo alegado no hace parte del postulado normativo que gobierna el caso, o no busca demostrar el supuesto de hecho de una norma que consagra el efecto jurídico perseguido por la parte.
- Utilidad: señala el autor que la prueba lo será cuando el hecho que se quiere acreditar con ella NO se encuentra plenamente demostrado en el proceso, tornándose necesaria.

Recuérdese que es obligación del Juez encontrar la verdad real de los hechos en que se funda el derecho, y la forma más expedita para llegar a ese fin es decretando las pruebas en que la parte apoye su teoría de defensa, materializándose así el derecho de contradicción. Pero ello en parte implica su decreto automático, pues el obrar del operador jurídico está delimitando por los criterios antes aludidos.

Descendamos al caso objeto de estudio. Varios son los documentos respecto de los cuales se soporta la pertinencia de la prueba pericial. Consúltese los folios 85, 91, 93, 97, 99, 102, 105, 121, 130 y 137 del archivo 01 contentivo de la demanda y sus anexos, en los cuales se aprecian diversas certificaciones emitidas por una empresa de mensajería en la que, respecto a la trazabilidad de la notificación electrónica, esclarecen cuándo fue enviado el mensaje, cuándo fue el acuse de recibido, o cuándo se dio la lectura del mensaje.

Véanse algunos de aquellos folios, así:



Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id Mensaje	4903
Emisor	intercolombia@intercolombia.com
Destinatario	JARISTIZABAL@INTERCOLOMBIA.COM - JAIME ARISTIZABAL TOBON
Asunto	CITACION A DESCARGOS
Fecha Envío	2021-02-24 16:40
Estado Actual	Acuse de recibo

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2021 /02/24 16:42:30	Tiempo de firmado: Feb 24 21:42:30 2021 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6.
Acuse de recibo	2021 /02/24 16:47:05	Feb 24 16:42:31 cl-1205-282cl postfix/smtp[28922]: 5C26E1248747: to=<JARISTIZABAL@INTERCOLOMBIA.COM>, relay=intercolombia-com.mail.protection.outlook.COM[104.47.37.36]:25, delay=1.3, delays=0.12/0.0.54/0.6t dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <8a771b2db634dbfe81c8829946268bd0dc34d0741e8f2dbbb11b747cec70a2 entrega.co> [InternalId=38697655348540, Hostname=SA0PR20MB3360.narr prod.outlook.com] 26719 bytes in 0.080, 325.608 KB/sec Queued mail for del



Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id Mensaje	1152
Emisor	intercolombia@intercolombia.com
Destinatario	jaristizabal@INTERCOLOMBIA.com - JAIME ARISTIZABAL TOBÓN
Asunto	FALLO JUDICIAL ESTATUTOS SINTRAISA
Fecha Envío	2020-07-08 23:28
Estado Actual	Lectura del mensaje

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2020 /07/09 09:08:58	Tiempo de firmado: Jul 9 14:08:58 2020 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.100.1.45.1.0.
Acuse de recibo	2020 /07/09 09:11:42	Jul 9 09:08:59 cl-1205-282cl postfix/smtp[24036]: 362B5124873A: to=<jaristizabal@INTERCOLOMBIA.com>, relay=intercolombia-com.mail.protection.outlook.com[104.47.36.36]:25, delay=1.2, delays=0.07/0.04/0.39/0. dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <b166e3b57d7a431f96344db36c709aae404e87538836e8fb9b606e8765121 entrega.co> [InternalId=40737764805017, Hostname=MVHPR2001MB1917.namprd20.prod.outlook.com] 25740 bytes in 0.151, 165.380 KB/sec Queued i for delivery)
Lectura del mensaje	2020 /07/09 15:12:52	Dirección IP: 201.233.104.240 Colombia - Antioquia - Medellín Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/5 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.3618.1 (Edition 360-1)



Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.


Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id Mensaje	1152
Emisor	intercolombia@intercolombia.com
Destinatario	jaristizabal@INTERCOLOMBIA.com - JAIME ARISTIZABAL TOBÓN
Asunto	FALLO JUDICIAL ESTATUTOS SINTRAISA
Fecha Envío	2020-07-08 23:28
Estado Actual	Lectura del mensaje

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2020 /07/09 09:08:58	Tiempo de firmado: Jul 9 14:08:58 2020 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.100.1.45.1.0.
Acuse de recibo	2020 /07/09 09:11:42	Jul 9 09:08:59 cl-1205-282cl postfix/smtp[24036]: 362B5124873A: to=<jaristizabal@INTERCOLOMBIA.com>, relay=intercolombia-com.mail.protection.outlook.com[104.47.36.36]:25, delay=1.2, delays=0.07/0.04/0.39/0. dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <b166e3b57d7a431f96344db36c709aae404e87538836e8fb9b606e8765121 entrega.co> [InternalId=40737764805017, Hostname=MVHPR2001MB1917.namprd20.prod.outlook.com] 25740 bytes in 0.151, 165.380 KB/sec Queued i for delivery)
Lectura del mensaje	2020 /07/09 15:12:52	Dirección IP: 201.233.104.240 Colombia - Antioquia - Medellín Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/5 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.3618.1 (Edition 360-1)



Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id Mensaje	1201
Emisor	intercolombia@intercolombia.com
Destinatario	jaristizabal@INTERCOLOMBIA.com - JAIME ARISTIZABAL TOBON
Asunto	SITUACIÓN LABORAL FALLO ESTATUTOS SINTRAISA Y MANEJO PREVENTIVO DEL COVID-19.
Fecha Envío	2020-07-14 11:28
Estado Actual	Lectura del mensaje

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2020 /07/14 11:29:47	Tiempo de firmado: Jul 14 16:29:47 2020 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.100.1.45.1.0.
Acuse de recibo	2020 /07/14 11:30:18	Jul 14 11:29:49 cl-1205-282cl postfix/smtp[16476]: 2156A124852A: to=<jaristizabal@INTERCOLOMBIA.com>, relay=intercolombia-com.mail.protection.outlook.com[104.47.37.36]:25, delay=2.5, delays=0.14/0.0.56/1.8. dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <0c8675793ef85cd7b7fb46f8eb88ee5de1543c75a2ed116271b2b7ca24db3f entrega.co> [InternalId=8065948589278, Hostname=BN6PR2001MB1810.namprd20.prod.outlook.com] 26826 bytes in 0.106, 128.361 KB/sec Queued i for delivery)
Lectura del mensaje	2020 /07/14 16:27:04	Dirección IP: 190.8.241.246 Colombia - Distrito Capital de Bogota - Bogota Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/5 36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.3618.173 (Edition 360-1)

Ahora, es claro que NO puede negársele al proceso el examen de un documento cuando resulta relevante para los fines del mismo. Incluso NO se cuestiona su pertinencia pues, en teoría, tiende a demostrar aquello que se debate. La empresa dice que comunicó los requerimientos efectuados y allega los soportes que a su juicio sostiene esa versión; por su parte el trabajador niega que ello hubiese sucedido, negación indefinida que, desde los postulados del derecho probatorio, y por obvias razones, está exento de acreditar.

Sin embargo, el trabajador en parte alguna, cuestiona la autenticidad de los documentos en mención, únicamente la organización sindical intrínsecamente lo hace al solicitar la designación del perito, señalando que la finalidad de tal medio es que un profesional idóneo indique si los correos adjuntados con la demanda fueron efectivamente recibidos, abiertos y conocidos por el destinatario, además de explicar conceptos como *acuse de recibido*, *lectura*, que llegó a la bandeja, que fue abierto y como saber si se abrió un documento adjunto.

Y justo ahí es donde NO se aprecia satisfecho el requisito de utilidad, especialmente de cara a los razonamientos plasmados en sentencias de radicación STL10796-2022, STC5420-2022, STC690-2020 y STC16051-2019, entre otras, a través de las cuales la Corte se ha ocupado de definir los conceptos que ahora pretende esclarecer el recurrente, contexto bajo el cual se encuentra acertada aquella aseveración del a quo en torno a que el despacho NO requería de unos conocimientos técnicos para definir el asunto.

Aunado a ello, debemos tener en cuenta lo que sobre el tema previó el legislador en el art. 272 del CGP cuando, sobre el desconocimiento del documento, advirtió que:

ARTÍCULO 272. DESCONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. En la oportunidad para formular la tachada de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del desconocimiento. **La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros.**

No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requisitos indicados en el inciso anterior.

De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá solicitar que se verifique la autenticidad del documento en la forma establecida para la tachada.

La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez considere que el documento es fundamental para su decisión.

Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria.

El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tachá y probarse por quien la alega.
(Resaltos de la Sala).

Quiere ello decir que si NO se formula el desconocimiento del documento en la oportunidad prevista para ello, es decir, en la contestación de la demanda, igual que sucede con la tachá de falsedad, la consecuencia es que dicho documento deba valorarse como auténtico ya que precluye la posibilidad prevista por el legislador para cuestionarlo, actividad que por demás se efectúa a través de un trámite especial en el que se traslada la carga de la prueba a quien presentó el documento (empleador) para que demuestre su autenticidad, so pena de carecer de eficacia probatoria.

También debe recalcarse que al momento de realizar las solicitudes probatorias, las partes están obligadas a exponer con claridad y precisión la pertinencia de los medios de convicción que aspiran les sea decretados, para de esa forma lograr que el juzgador se convenza sobre el aporte probatorio de los elementos que se pretende llevar a juicio y así ordene su práctica.

Así las cosas, en criterio de esta Sala, el decreto de la prueba pericial u oficio a Servientrega fue correctamente denegado, pues si bien resulta conducente, toda vez que en nuestro sistema procesal rige la libertad probatoria y, por consiguiente, las partes pueden demostrar o refutar los hechos que fundamentan su tesis de defensa con cualquier medio, así como también satisface la exigencia de pertinencia, dado que conserva cierta relación con el tema de prueba, no supera el presupuesto de utilidad porque su decreto dilataría innecesariamente el juicio de cara a la finalidad que persigue la organización sindical cual es, de un lado, esclarecer conceptos que NO requieren de una intervención técnica, sólo se trata del manejo de cierto vocabulario (introducido en el proceso judicial de cara al acrecimiento en la utilización de medios electrónicos), y de otro lado, definir la autenticidad de la trazabilidad de sendos correos que, en estricto sentido, NO ataca el trabajador.

Incluso, bien cabría preguntarnos si lo procedente en este aspecto sería acudir a lo previsto en el art. 227 del CGP según el cual, *la parte que pretenda valerse de un dictamen deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas*. Y la misma norma consagra que si el término previsto resultare insuficiente, la parte interesada podría anunciarlo para que el juez le concediere un plazo. Bajo esta óptica, si SINTRAE consideraba que en el proceso debían verificarse hechos que requerían un conocimiento técnico, bien pudo acudir a un ingeniero experto en documentología para conceptuar sobre el punto que a su juicio presentaba oscuridades o aspectos por definir y/o esclarecer, lo que NO ocurrió.

Además de lo expuesto, los argumentos planteados en la apelación NO atacan los fundamentos que tuvo en cuenta el juez al denegar el decreto del medio probatorio, centrados en NO requerir ningún conocimiento especial o adicional. Más bien el recurrente se inclinó por reiterar cuál era la finalidad de la petición, no así las razones por las que NO compartía las consideraciones del a quo, lo que de haber ocurrido, permitiría confrontar ambos fundamentos.

En este orden de ideas, se CONFIRMARÁ en su integridad la decisión objeto del recurso de alzada.

Se condenará en costas a SINTRAE por no haber tenido éxito en el recurso, y al trabajador al ser resuelta desfavorablemente la queja. Se fijará como agencias en derecho la suma de \$300.000 a cargo de cada uno.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

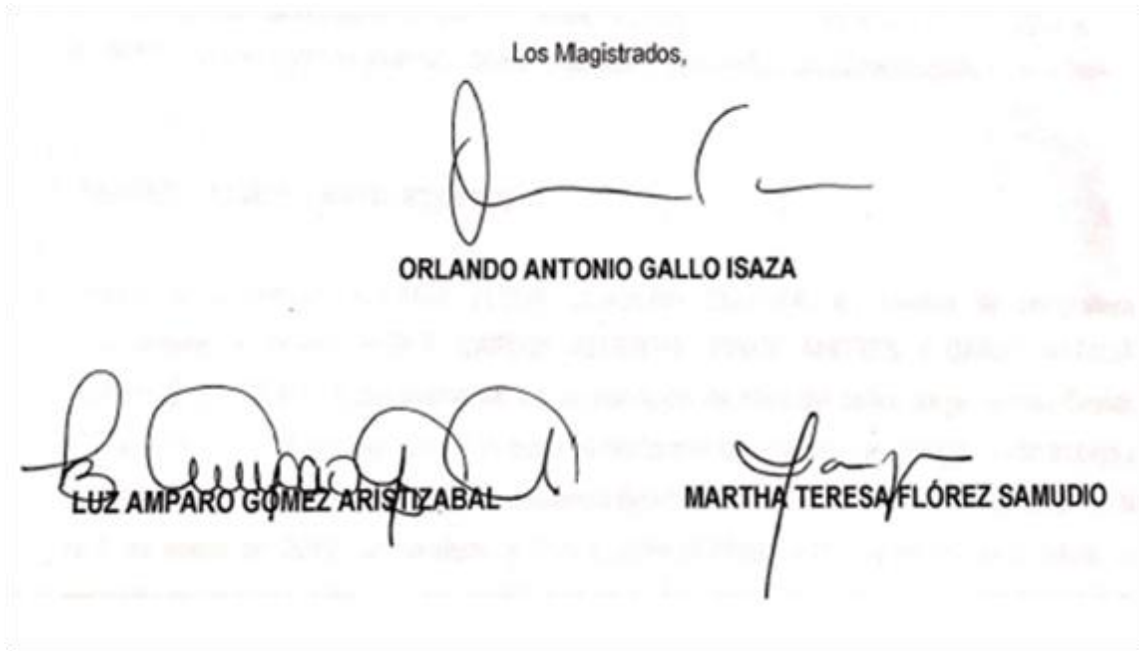
RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMA la decisión proferida el 11 de noviembre de 2022 mediante la cual el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín denegó tanto el recurso de alzada formulado por el trabajador, como el decreto de la prueba pericial, en el proceso especial de fuero sindical instaurado por **INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.** contra el señor el señor **JAIME ARISTIZABAL TOBÓN** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 10.254.610, trámite al que se vinculó **SINTRAE**, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de SINTRAE y el señor JAIME ARISTIZABAL TOBÓN. Se fija como agencias en derecho la suma de \$300.000 a cargo de cada uno, a favor de INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(Firmas escaneadas)



CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 221 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 07 DE DICIEMBRE DE 2022

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>